

Acta Sesión 116°

Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles

En Santiago de Chile, a 23 de diciembre de 2021, vía videoconferencia, se realizó la sesión N° 116 de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, con la asistencia de los siguientes integrantes: doña Geraldine González Santibáñez, quien preside la reunión, junto a don Carlos Christian Bate Trippel, don Agustín de la Cuesta Whittle, don Tomás Flores Jaña, don Alfonso Muga Naredo, don José Miguel Salazar Zegers y don Marcelo Villena Chamorro.

Participa el asesor jurídico de la Comisión, don Cristian Romero Cocuy.

Siendo las 15.30 horas se inicia la reunión:

I. Revisión del primer informe de asesoría a la Subsecretaría de Educación Superior

Continuando la labor iniciada en sesiones anteriores, los comisionados revisan detalladamente y dan forma final al primer informe a ser enviado a la Subsecretaría de Educación Superior, de acuerdo a lo solicitado en la Resolución Exenta 6053 del 7 de diciembre pasado, y que, según lo acordado anteriormente, se referirá a la participación de las instituciones reguladas en el proceso con relación a las memorias de cálculo.

Los comisionados intercambian observaciones y comentarios a propósito del documento que la Presidente ha circulado, en el cual se consolidan los aportes realizados.

El texto final se elabora a partir de las conclusiones alcanzadas en función de los análisis realizados y su contenido cuenta con la concurrencia y participación de todos quienes integran esta Comisión.

II. Aprobación del primer informe de asesoría

Los comisionados acuerdan por unanimidad aprobar el documento que contiene el primer informe de asesoría, el cual se refiere a la participación de las instituciones de educación superior en gratuidad en el proceso de regulación de aranceles.

III. Comunicación a la Subsecretaría de Educación Superior

El documento recién acordado, copia del cual se acompaña como anexo a la presente acta, es remitido con esta fecha a la Subsecretaría de Educación Superior, mediante un oficio dirigido al señor Subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas.

IV. Próxima sesión

Se fija la próxima sesión para el martes 28 de diciembre a las 15.00 horas.

Sin otros temas que discutir, se pone término a la reunión siendo las 18.00 horas.

La Presidente firma la presente acta mediante firma electrónica, dando fe que su contenido refleja fielmente el texto aprobado por los comisionados.


Firmado con firma electrónica
avanzada por
GERALDINE DEL CARMEN
GONZALEZ SANTIBANEZ
Fecha: 2022.02.04 12:54:23 -0300

ANEXO

ACUERDO EN SESIÓN N°116 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021

COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS ARANCELES

En sesión de 23 de diciembre de 2021, vía videoconferencia, con la asistencia de sus integrantes: doña Geraldine González Santibáñez, quien preside la reunión, don Carlos Christian Bate Trippel, don Agustín de la Cuesta Whittle, don Tomás Flores Jaña, don Alfonso Muga Naredo, don José Miguel Salazar Zegers y don Marcelo Villena Chamorro, la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles creada en virtud del artículo 95° de la Ley 21091 sobre Educación Superior, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Informe de asesoría técnica solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior en Resolución Exenta N° 6053 de 7.12.2021

I. Consideraciones iniciales

1. En aplicación de la norma prevista en el Artículo 95 letra c) de la Ley 21091, la Subsecretaría de Educación Superior tuvo a bien solicitar a esta Comisión una asesoría sobre materias a las que alude su Resolución Exenta 6053, de 7 de diciembre de 2021. Analizado el encargo por parte de la Comisión, ésta concluyó que en sus informes debe referirse fundamentalmente a dos aspectos del primer proceso de regulación de aranceles de pregrado: uno relativo a la participación de las instituciones reguladas en el proceso, en especial en lo que dice relación con su acceso a las memorias de cálculo y otro relacionado con la creación de los grupos especiales de las carreras de Derecho y de Pedagogía; y la agrupación de los grupos de carrera.

2. Para la preparación de estos informes, la Comisión ha tenido en especial consideración los análisis, conclusiones y recomendaciones contenidas en los informes que ella evacuó en relación con el mismo proceso y que incluyen:

- a) Informe de Observaciones N° 1/2019, de 27 de diciembre de 2019, por el cual se transmiten las observaciones hechas a las bases técnicas de este primer proceso arancelario, y
- b) Informe con Observaciones sobre el Informe de Cálculo de Conformidad con las Bases Técnicas Vigentes, que fuera aprobado el 30 de octubre de 2020.

II. La participación de actores en el proceso con relación a las memorias de cálculo

1. La fijación de tarifas en sectores regulados presenta importantes complejidades y desafíos desde múltiples puntos de vista, como lo demuestran las más de tres décadas de experiencia que el país dispone en este campo. Por ello, es usual que los primeros ejercicios de este tipo dentro de un nuevo sector regulado sirvan al modo de experiencias piloto, para generar información relevante que contribuye a facilitar el desarrollo de futuros procesos. Al mismo tiempo, es evidente que existen aspectos de tales procesos que sólo pueden apreciarse en toda su magnitud

una vez que concluye la primera implementación del nuevo régimen, sin que ello se traduzca en una menor exigencia técnica o una cierta laxitud en el cumplimiento normativo. Tal vez por esa misma causa, la Ley 21091 diferenció los roles que la Comisión cumple en la fijación de aranceles de gratuidad: sus observaciones a las bases técnicas no son vinculantes para la Subsecretaría en el primer proceso de fijación de aranceles, como si ocurrirá en futuros procesos arancelarios.

2. En su Informe de Observaciones sobre el Informe de Cálculo de los Valores de los Aranceles Regulados, de los Derechos de Matrícula y de los Cobros por Concepto de Titulación o Graduación, la Comisión abordó explícitamente el tema del manejo de la información que pudiera tener el carácter de reservada o confidencial. Esto a propósito de los antecedentes que deben recibir las instituciones de educación superior que participan del proceso, para fines de formular observaciones al cálculo mismo. Se trata de un problema que afecta muchos procesos de regulación tarifaria y que, en caso de no resolverse adecuadamente, podría obstaculizar la entrega de información y participación de los regulados en ellos.

Tal situación es particularmente relevante para la definición de los aranceles de gratuidad, en los términos definidos por la metodología adoptada por la Subsecretaría. Conforme a ella, la determinación del arancel para un grupo de carrera utiliza un conjunto de datos de costos de las distintas instituciones en gratuidad que la imparten. Sin acceso al detalle de la información de costos de otras instituciones que imparten la misma carrera dentro del régimen de gratuidad, los regulados no estarían en condiciones de revisar a cabalidad el cálculo del arancel de una carrera que está dentro de su oferta académica de pregrado.

3. Con el objeto de propiciar mejoras en futuros procesos de regulación de aranceles respecto a esta materia, el informe referido en el punto anterior indicó que *“...[e]n opinión de la Comisión, tal problema podría ser resuelto mediante la definición de formatos de bases de datos anonimizados -que incluso pueden ser acordados con las instituciones- que les permitan tener acceso a la información que puedan analizar sin poner en riesgo la confidencialidad de partes de la muestra recopilada”* (p. 12). Asimismo, la Comisión estima que es completamente factible desarrollar un protocolo de actuación que permita a los regulados asistir de manera presencial a auditar el cálculo y la información confidencial anonimizada sin posibilidades de copiar dicha información. La existencia de una sala de evidencias, asistida por un profesional capacitado para explicar en detalle el cálculo sin revelar el origen de los datos utilizados, es una solución que bien podría enmarcarse dentro del protocolo respectivo.

4. Sin perjuicio de lo anterior, un tema clave que subyace al problema identificado y que determina en buena medida las posibilidades de avanzar en esta dirección, dice relación con una clara determinación de qué se entenderá por información reservada para estos efectos. Dicha definición debería ser adoptada explícitamente por la autoridad y ella necesita ser consistente con la información que ya se exige periódicamente a las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente, a propósito del seguimiento de sus procesos académicos y financieros.

5. Ahora bien, la orientación futura de este análisis de la Comisión queda plasmada de manera inequívoca en el informe ya antes citado. En dicho informe se expresa, dentro de la sección 2 de Conclusiones y recomendaciones, lo siguiente: *“La Comisión aprecia que las instituciones de educación superior no recibieron la información necesaria para una participación efectiva en el proceso de apreciaciones. Ello debiera ser abordado de manera prioritaria por la Subsecretaría en los **próximos procesos de fijación de aranceles**”* (p. 37, el destacado es nuestro). Es decir, asume, como se expresó en el primer punto de esta sección, que existe un aprendizaje importante de las instancias regulatorias en materia de fijación de aranceles de gratuidad.

Para que este aprendizaje se traduzca en mejoras del proceso, se requiere de un trabajo sistemático encabezado por la Subsecretaría de Educación Superior que considere la participación de las instituciones reguladas y, sobre todo, una prolija evaluación de las aprehensiones de éstas respecto a la confidencialidad y reserva de la información.


Firmado con firma electrónica
avanzada por
GERALDINE DEL CARMEN
GONZALEZ SANTIBANEZ
Fecha: 2021.12.23 17:54:47 -0300